

Ciudades chinas: ¿Un “escenario de riesgo”?

Desigualdad, malestar social y la política del esencialismo cultural

Roberta Zavoretti

Doctoranda, Departamento de Antropología y Sociología, School of Oriental and African Studies,
(SOAS), Londres
robertazavoretti@hotmail.com

RESUMEN

La “creciente desigualdad” en China se describe a menudo como el “efecto colateral” del milagro económico del país, y como una amenaza potencial a su estabilidad y prosperidad. Centrándose en varios enfoques alternativos de la relación existente entre el crecimiento del PIB y la pobreza/bienestar, este artículo sostiene que el fracaso en el acceso a los beneficios sociales entre los trabajadores urbanos y la creciente desigualdad en las ciudades chinas son dos aspectos centrales en el rediseño radical de la sociedad llevado a cabo en la China post Mao, y que es esencial tener en cuenta la complejidad de la situación para percibir nuevas dimensiones de privilegio y vulnerabilidad. Después de la aparición de una serie cada vez mayor de conflictos y protestas relacionados con el empleo, los expertos debaten los riesgos que el malestar social podría tener y, a menudo, apelan a la cultura china como un elemento muy necesario a la hora de esbozar escenarios fiables. Pero, para captar el proyecto de modernización de China en toda su complejidad, es necesario evitar las lecturas esencialistas de la cultura y adoptar un enfoque crítico en el estudio de la sociedad. Este artículo intenta ampliar el alcance de nuestras preguntas y preocupaciones acerca de estabilidad social china, y sugiere líneas alternativas de estudio de la sociedad china.

Palabras clave: China, sociedad, ciudad, pobreza, desigualdad social, desarrollo, cultura

Traducción del original en inglés

LA POBREZA EN LA CHINA URBANA ACTUAL

“Cuando [los pobres] son reconocidos (en el sentido cultural de la expresión), lo son normalmente como una categoría política abstracta, divorciada de las personas reales y concretas”

Appadurai, 2005

La mayoría de trabajos de investigación sociológicos y económicos sobre China admiten que hay una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. En los últimos veinte años, la desigualdad existente entre el este y el oeste y entre las áreas rurales y las urbanas se ha incrementado notablemente. En 1994, la Academia China de Ciencias Sociales (ACCS) registró un coeficiente Gini¹ nacional del 0,434, mientras que en el 2003 éste había alcanzado el 0,5, según datos de la revista *Social Sciences in China* (Zhang y Wu, 2005). Los autores atribuyen el aumento de la desigualdad y el incremento en el número de personas que viven por debajo de los 2 RMB (renminbi) al día a una serie de causas complejas, en particular a la demolición de viviendas viejas asequibles en los centros urbanos y a la adquisición de tierras en el proceso de urbanización.

La ecuación entre las tasas de crecimiento en China y el “desarrollo” o la “mejora del nivel de vida” ha sido cuestionada por Drèze y Sen, quienes afirman que, antes de las reformas, el impresionante esfuerzo llevado a cabo por China de inversión pública en los ámbitos de la salud y la seguridad social había posibilitado un aumento considerable de la esperanza de vida, a pesar de un estancamiento en el crecimiento y de unos niveles de renta y de producción per cápita bajos. La única excepción a esta tendencia ascendente corresponde a la hambruna de 1959-1961, que se debió en gran medida a los disturbios sociales de motivación política. Durante la primera parte de la década de los ochenta, a pesar de un crecimiento vertiginoso y de una elevada producción agrícola, la esperanza de vida en China empeoró en mayor o menor medida, particularmente para las mujeres. Expertos en dinámica intradoméstica vinculan esta tendencia a una combinación entre la preferencia por los hijos varones y una implementación más rigurosa de la política del “hijo único” que, especialmente en el campo, pueden haber conducido al infanticidio y al abandono de las niñas (Croll, 2000; Milwertz, 1996).

Los datos sobre crecimiento, producción, renta y consumo no son suficientes para definir los niveles de bienestar, y mucho menos para describir la pobreza (Sen, 1998). La definición de la pobreza es un tema crucial para la teoría del desarrollo en general, y extraordinariamente relevante para los nuevos pobres de China. El enfoque más conocido de la definición de la pobreza relaciona el fenómeno con los niveles de

renta y consumo, medidos ambos sobre una base doméstica o per cápita. Con este sistema, es relativamente fácil recoger los datos, que luego pueden ser comparados en función del tiempo y del lugar, así como analizados y utilizados como guía para la toma de decisiones.

Gustaffson y Wei (2000) eligieron un umbral del 50% de la mediana de la renta equivalente disponible en 1988, que resulta estar muy cerca de la línea-umbral de la pobreza definida por el Banco Mundial mediante la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) en dólares por día. Los autores actualizan la línea-umbral de la pobreza para el 1995 usando el valor de los precios al consumo y variando luego los niveles de la línea-umbral. Esta metodología apunta a un resultado que no puede ser considerado como “pesimista” en absoluto. Los autores eligen un indicador “poco preciso”, debido a las dificultades que existen para establecer comparaciones interregionales del poder adquisitivo. La conclusión a la que llegan es la de que “en el contexto del impresionante crecimiento experimentado por China, la reducción de la pobreza parece sorprendentemente pequeña”. Aunque la pobreza se revela como un fenómeno principalmente rural, el panorama urbano tampoco es muy halagüeño: en Guanzhou y en Shanghai, durante la década de los noventa, el 12% y el 13% de las poblaciones residentes respectivas fueron cayendo por debajo del umbral específico de pobreza de las ciudades. La pobreza castiga más duramente a los desempleados y a los jubilados, está estrechamente relacionada con el factor localidad y aparece como un fenómeno “atomizado”.

Uno de los principales defectos de este análisis es que no toma en consideración la creciente población migratoria china. La investigación llevada a cabo por Khan y Riskin (2005) sobre el período de 1995-2002 trata de incluir a los trabajadores eventuales, aunque se centra predominantemente en el comercio y en la venta al por menor, y no tiene en cuenta a los trabajadores de la construcción que viven en la propia obra o a los trabajadores de las fábricas-dormitorio. Aunque la migración da a los habitantes de las zonas rurales la oportunidad de aumentar sus rentas, la renta familiar media del trabajador itinerante es aproximadamente un 35% menor que la de los residentes urbanos, a pesar del hecho de que el número de trabajadores por familia es mayor en las familias itinerantes con respecto a las residentes. La desigualdad entre los trabajadores itinerantes es también un 20% mayor que la desigualdad entre los residentes, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Aunque la inclusión (parcial) de los trabajadores itinerantes en el estudio atenúa la desigualdad rural/urbana, la brecha se ha ido ampliando y, a pesar de que la desigualdad interprovincial cayó entre el 1995 y el 2002, ello contribuye a que el coeficiente Gini se mantenga en un 0,45. Incluso sin tener en cuenta a la población itinerante, la distribución nacional de la renta en el 2002 registra un coeficiente Gini un 21% más alto que en 1995 (Khan y Riskin, 2005).

La pobreza como categoría relacional

A pesar de su exactitud, los estudios arriba mencionados no pueden ofrecer más que un esbozo de lo que es la pobreza en la China actual. Áreas importantes como el trabajo itinerante y la distribución intradoméstica se quedan a oscuras o son tratadas como casos marginales. Al igual que la mayor parte de trabajos de investigación basados en el enfoque renta-pobreza, no captan los procesos que llevan a la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad, que son contextuales y que afectan a las personas de forma diferente en función de su estatus, género, edad, identidad étnica, nivel cultural, etc. Un enfoque basado en la renta está pensado para funcionar en escenarios de mercado, pero es poco riguroso para analizar actividades económicas no marquetizadas o monetarizadas como, por ejemplo, los servicios proporcionados (o no proporcionados) por determinados grupos, la familia, individuos o el Estado (Kabeer, 1994; Hulme y Anderson, 2003). En la China urbana anterior a la reforma, como en la antigua Unión Soviética, los servicios proporcionados por el Estado representaban una parte sustancial de la gratificación recibida por el trabajador, y cubrían aspectos sustanciales de su medio de vida, por no mencionar el bienestar y la educación de las personas a su cargo. Como consecuencia de la reducción de gasto público por parte del Estado, la mayor parte de las personas no privilegiadas tienen que apoyarse en sus familias, y no en el mercado, para la provisión (no retribuida) de servicios sociales (Whyte, 2003).

Algunos expertos critican las definiciones de la pobreza en función de la renta porque, de hecho, se basan en una serie de suposiciones que equiparan a los individuos sin tener en cuenta en absoluto el contexto social específico en que se mueven. Amartya Sen (1982) cuestiona los supuestos básicos de la teoría de la elección racional afirmando que el *homo economicus* es un “tonto racional”, un “imbécil social”, un ente ficticio sin moral, dignidad, inquietudes ni compromisos. Entre las posturas más radicales está el argumento de Robert Chambers (1995) según el cual, no sólo la pobreza puede entenderse solamente en un marco local y temporal concreto, sino que solamente los propios “pobres” pueden, a partir de su experiencia vivida, definir la pobreza mediante el uso de sistemas participativos. La propia “racionalidad” es cuestionada como concepto relativo, el investigador tiene que dejar a un lado su propia “racionalidad” para “aprender” de la estrategia de supervivencia de los pobres. La cultura, la percepción y el contexto social representan variables fundamentales en la experiencia de la pobreza y en las estrategias adoptadas por los pobres para sobrevivir a fenómenos complejos como la exclusión, la enfermedad o la discriminación. “La pertenencia al grupo de los pobres se define parcialmente en virtud de unos baremos oficiales, pero los pobres también tienen conciencia de grupo [y] una interpretación de sí mismos y del mundo que tiene dimensiones y expresiones culturales” (Appadurai, 2005). Diferentes grupos experimentan su condición de modo diferente y adoptan diferentes estrategias para sobrellevarla.

En el caso de la antigua Unión Soviética, la Europa del Este y China, la pobreza adopta formas nuevas e inesperadas justo allí donde el privilegio solía ser la norma. En la antigua Unión Soviética, el reconocimiento de uno mismo como “pobre” es un paso que cuesta mucho a dar para quienes han pasado toda la vida con un empleo mal pagado pero seguro. Quienes experimentan la pobreza como una condición nueva, tratan de entender este cambio imprevisto, adoptando una estrategia y una actitud ambivalentes respecto a “las normas”, que es lo apropiado en un contexto de inseguridad permanente (Appadurai, 2005; Dudwick *et al.*, 2003). En las ciudades chinas de hoy, una amplia incredulidad invade a la población urbana, cuando esta asiste como testigo al repentino fracaso de unos derechos que han sido refrendados por la ideología oficial durante treinta años (Croll, 1999). Incluso ciertas nuevas formas de empleo representan una pérdida sustancial de condición (y de privilegios); por ejemplo, en el caso de las mujeres trabajadoras, su reubicación como trabajadoras domésticas equivale a una forma de relegación desde el ámbito público al doméstico, desde el trabajo “cualificado” al trabajo “no cualificado”, desde el ámbito “urbano” a un sector tradicionalmente lleno de mano de obra “rural” (Howell, 2003).

Tomar el domicilio familiar como la unidad básica de estudio e intervención es una opción discutible. La “unidad familiar”, que ya estaba presente en este sentido en la tradición colonial británica (Guyer y Peters, 1987), se fue ampliando hasta el marco de la denominada “Nueva Economía Doméstica” (NED) (Moser, 1993). En el modelo de la NED, la unidad familiar corresponde a una pareja adulta en cohabitación con uno o más hijos, en donde las responsabilidades están repartidas entre el varón “sostén de la familia” y la mujer “ama de casa”, que se dedica sobre todo a dar a luz y a criar a los hijos. El varón –sostén de la familia– aporta su sueldo al fondo común siguiendo el principio de “altruismo en el ámbito familiar, egoísmo en el mercado”; dado que se espera que los intereses de la unidad familiar coincidan con los intereses de cada miembro, el mismo principio del altruismo debería guiar también la conducta de todos sus miembros (Becker, 1993). Este modelo, además de no ser en absoluto representativo de la mayoría de las sociedades, implica una carga laboral “diferente e igual”, así como un acceso equitativo a los recursos y al poder de toma de decisiones entre los miembros de la familia. Este enfoque representa una especie de “atajo” para no tener que deconstruir la cuestión del poder y para sortear las desigualdades intrafamiliares basadas en la edad o el género, muy presentes en China (Drèze y Sen, 1989; Kandiyoti, 1988; Greenhalgh, 1994; Croll, 1999, 2000; Milwertz, 1996). La noción de la unidad familiar como “función de servicio conjunta” representa la familia/unidad familiar como una mente racional única (Moser, 1993), un átomo aislado en el que la dinámica interna pertenece a la esfera “sagrada” del matrimonio (Yanagisako, 1979; Dwyer y Bruce, 1988; Moser, 1993).

Teniendo en cuenta que categorías como “familia”, “unidad familiar”, etc., están incrustadas en unos sistemas culturales (Guyer y Peters, 1987), los análisis domésticos

deberían averiguar “cuáles son las unidades significativas de producción, consumo e inversión” en cada contexto específico, y “cuáles son los principales flujos y transferencias de recursos entre individuos y unidades” (Ibídem: 208). Este cambio implica un alejamiento de las estrategias de desarrollo basadas en datos cuantitativos procedentes de encuestas; promueve una concepción más holística de la sociedad y el desarrollo, en la que los procesos y las relaciones de poder se captan mediante una investigación contextualizada de tipo cualitativo (Razavi, 1999; Hulme y Anderson, 2003).

Titularidades y capacidades

Una contribución fundamental al análisis de la pobreza y la desigualdad ha sido la de Amartya Sen, quien, con su trabajo sobre titularidades y capacidades, libertad y democracia, ha “ampliado” el estudio de la pobreza y la desigualdad introduciendo valores como la dignidad y el bienestar moral y social en el análisis económico del bienestar (Appadurai, 2005). Un enfoque exclusivo en la disponibilidad impide que los análisis de la pobreza “tomen en consideración los procesos mediante los cuales la gente establece sus titularidades”. Las titularidades de una persona están representadas por “el conjunto de paquetes de productos alternativos que pueden adquirirse mediante el uso de los diferentes canales legales de adquisición abiertos a una persona [...]. El conjunto de titularidades de una persona viene determinado por el paquete original de sus pertenencias (lo que se conoce como su ‘dotación’) y por los varios paquetes alternativos que dicha persona puede adquirir, empezando con cada dotación individual, mediante el comercio o la producción (lo que se conoce como su ‘titularidad de intercambio’) (Drèze y Sen, 1989).

El enfoque de las titularidades se ha ampliado más tarde en lo que generalmente se conoce como el “enfoque de las capacidades”, en donde estas se definen como “aquello que la gente es capaz de hacer y de ser” (Nussbaum, 2004). La deficiencia en capacidad está estrechamente relacionada con los bajos ingresos, y viceversa, una renta baja afecta claramente a las capacidades de las personas. Unas capacidades mayores también pueden incrementar el poder ganancial (Sen, 1999).

El enfoque de las titularidades y las capacidades permite efectuar análisis contextualizados de la desigualdad que se centran en los procesos de adquisición de recursos sin negar la importancia de la disponibilidad de estos. Tratando de entender “la pobreza y las privaciones en función del tipo de vida que pueden vivir realmente las personas y de las libertades de que realmente disfrutan” (Ibídem), este enfoque aborda cuestiones relativas a la distribución intrafamiliar de los recursos, y al debate sobre la teoría de la elección racional, con lo que proporciona una plataforma de debate en torno a los factores económicos, legales, sociales y culturales que afectan a las titularidades de las personas y que contribuyen a la perpetuación de la desigualdad. El trabajo de Sen ha

sido ampliamente discutido entre los investigadores de la pobreza determinada por el género, que consideran la unidad familiar como un lugar de regateo en el que la percepción, los roles sociales, las normas consuetudinarias y sus relaciones con las instituciones a diferentes niveles, son cruciales para la habilidad negociadora de una persona y para sus titularidades y capacidades (Sen, 1991, 1993; Kandiyoti, 1988, 1998; Moore, 1992; Gore, 1993).

Este enfoque nos permite analizar la nueva pobreza urbana en China en función del fracaso de las titularidades de las personas. Fracaso que puede producirse tras una disminución en la dotación de una persona, como por ejemplo, una pérdida de tierra o de trabajo debido a la mala salud, o un “cambio desfavorable en (...) la titularidad de intercambio (por ejemplo, pérdida del empleo, reducción salarial, incremento del precio de los alimentos, caída de los precios de los bienes o servicios que vende la persona, disminución en la producción de los trabajadores por cuenta propia)” (Drèze y Sen, 1989). La pérdida de servicios públicos, como los servicios básicos de salud y educación, también se incluyen, puesto que son esenciales para una alta calidad de vida y una alta capacidad de generar ingresos (Sen, 1999). La reconfiguración de las ciudades chinas está inextricablemente relacionada con una pérdida sustancial de titularidades por parte de las que en su día fueron las “clases trabajadoras”.

OTRA CHINA: LOS TRABAJADORES URBANOS TREINTA AÑOS DESPUÉS

“La cara bifronte del mercado, a la vez ‘ángel liberador’ y ‘diablo destructor’, es totalmente aceptada como un principio de realidad necesario”.

Tang, 2000

Antes de 1976, un sistema de bienestar integral proporcionaba a los urbanitas chinos una cantidad considerable de servicios, los cuales estaban gestionados por unidades laborales urbanas (*danwei*) de empresas colectivas y de propiedad estatal. Este sistema institucionalizó la línea divisoria existente entre las áreas rurales y urbanas, ya que excluía a la población rural de la provisión de un bienestar global. La población rural podía acceder a los servicios de salud organizados por las comunas y por los “médicos descalzos” que, aunque tenían una importancia decisiva en la calidad de vida de las poblaciones

rurales, eran sustancialmente inferiores a la provisión de servicios urbanos. El sistema de bienestar, basado en la ocupación para todos, garantizaba empleo permanente y seguridad económica, prestaciones por jubilación y unos cuantos servicios más, como ayudas a la vivienda y cuidados de salud, prestaciones por maternidad, enfermedad o desempleo, así como ayudas especiales a los sectores de población más vulnerables. Estos servicios eran administrados por los ministerios de Trabajo y Personal y por el Ministerio de Asuntos Civiles con el apoyo de organizaciones comunitarias (Drèze y Sen, 1989; Croll, 1999).

En la década de los ochenta, el Consejo de Estado modificó el sistema de seguridad social basado en la ocupación, en respuesta a las preocupaciones generadas por la sostenibilidad económica y a las nuevas tendencias emergentes debidas a la transición a una economía de mercado. Una de estas tendencias fue que los trabajadores urbanos tenían que buscar empleo fuera de los sectores colectivos y de propiedad estatal, con lo que perdían las titularidades que les permitían acceder a los servicios sociales y a las pensiones proporcionadas por el Estado. A partir de la década de los noventa, las Empresas de Propiedad Estatal (EPE) han ido siendo alentadas a evitar su dependencia de las subvenciones estatales y a entrar en el sistema de pérdidas y ganancias. Sin embargo, estas empresas difícilmente pueden competir en el mercado y proporcionar al mismo tiempo bienestar social. La reforma del mercado trajo consigo una caída de los fondos para las prestaciones estatales, con la consiguiente erosión de la seguridad en el trabajo y de los servicios de bienestar para quienes siguen trabajando en el sector público (Croll, 1999).

Reforma de las pensiones

La reforma de las pensiones es uno de los aspectos de la seguridad social más difíciles y que más retos plantea a las autoridades chinas. Se prevé que la esperanza de vida alcance los 75 años para el 2030. El número total de pensionistas se incrementó desde los 3,14 millones en 1978 a los 30,94 millones en 1995; y la ratio de dependencia por edad, que era de 15 puntos en 1995, se espera que suba hasta los 38 en el 2030 (McCarthy y Zheng, 1996). Los costes de la seguridad social y del bienestar se incrementaron desde un 13,7% de la masa salarial total en 1978 hasta un 30% a comienzos de la década de los noventa (Croll, 1999). Los ancianos, y especialmente las ancianas, tienen que hacer frente a unos gastos cada vez mayores en su día a día cotidiano y en la asistencia médica en una coyuntura caracterizada por una inflación galopante. Cuando el Estado deja de pagar las pensiones, muchos jubilados tienen que buscar nuevamente un empleo, y se producen unas desigualdades enormes entre quienes tienen estudios, y/o están cualificados, así como disponen de una buena red social de contactos, y quienes carecen de ello.

El Gobierno chino ha intentado transferir las responsabilidades desde las empresas a las agencias de la seguridad social. También existe la conciencia de que es necesario

un sistema de seguridad social integral que abarque a toda la sociedad. En 1988, los antiguos ministerios de Trabajo, Personal y Asuntos Sociales fueron fusionados en un nuevo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ese mismo año se introdujo la política de la “doble garantía”, a fin de garantizar la ayuda básica a los jubilados y a los trabajadores despedidos de las EPE. El modelo de seguridad social emergente, diseñado con la ayuda del Banco Mundial, implica la asignación de la administración y la gestión de los fondos a unas agencias especializadas, y el compromiso de incluir a las personas que no trabajan en el sector público. El nuevo sistema multipilar incluye un “fondo de reserva social” totalmente financiado, combinado con una cuenta de ahorro personal constituida mediante contribuciones individuales y empresariales.

El Estado también permite el desarrollo de sistemas comerciales de provisión de bienestar; de todos modos, dicha provisión solamente está al alcance de quienes pueden pagarla, lo que refuerza las desigualdades existentes. El Gobierno alienta el desarrollo de servicios comunitarios, empresas de beneficencia para el empleo de personas discapacitadas y diversas iniciativas organizadas por ONG. Aunque este enfoque ha tenido éxito en las zonas prósperas, las colaboraciones estatales con organizaciones no gubernamentales se ven dificultadas por una falta de legislación específica al respecto, y tampoco representan una estrategia a escala nacional y coherente a largo plazo para la provisión de Seguridad Social (Croll, 1999).

El Gobierno se ha comprometido con la reforma desde finales de los noventa: entre 1998 y 2001, el gasto fiscal central en seguridad social se quintuplicó, y la expectativa era que creciese un 28% más en 2002. Sin embargo, montar un sistema moderno de seguridad social en el contexto actual está demostrando no ser nada fácil; desde la transición a la economía de mercado, muchas empresas no pueden pagar los fondos de seguro de la seguridad social. Otro problema es la transferencia de responsabilidades de los fondos sociales comunes a los gobiernos urbanos locales, pues su déficit puede favorecer un uso incorrecto de los fondos de pensiones (Zhang, 2000; Duckett, 2004).

Mientras la reforma se desarrolla de una forma gradual y poco sistemática, la asistencia familiar de base doméstica proporciona la mayor parte de los servicios que necesitan los ancianos y los discapacitados: un estudio llevado a cabo en la ciudad de Baoding, en 1993, reveló que los ancianos de la muestra, para recibir asistencia, dependían en su inmensa mayoría de sus hijos y cónyuges (Whyte, 2003). La responsabilidad familiar por los ancianos ha sido explícitamente alentada por el Gobierno, y el Banco Mundial sugiere que “la decisión sobre cómo preservar y fomentar los valores familiares tradicionales será un tema político clave en el diseño de sistemas de seguridad social para la tercera edad en China” (McCarthy y Zhang, 1996). A pesar de ser considerado “crucial”, el papel de la familia “tradicional” no es analizado por los autores, sino concebido como algo “natural” que tan sólo precisa de cierto “estímulo” adicional.

Provisión de servicios: ¿un asunto familiar?

Mientras que la dicotomía artificial entre trabajo productivo y trabajo reproductivo contribuye a menospreciar los servicios de asistencia como algo secundario, las investigaciones en el campo de los estudios de género ponen de relieve lo indispensables que son, en la mayoría de sociedades, trabajos como el del cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos; tareas que normalmente lleva a cabo de forma gratuita la población femenina, lo que aumenta la carga del trabajo remunerado (Moser, 1993; Elson, 1995). Este panorama es problemático en la China urbana, donde la política del “hijo único” ha conducido a una reducción espectacular del tamaño de la unidad familiar tradicional.

Las personas con unas titularidades de recursos intrafamiliares bajos, y aquellas sin familiares, son las que tienen más probabilidades de salir perjudicadas de la creciente dependencia del entorno familiar. Las titularidades intrafamiliares de las personas dependientes están a su vez en peligro debido al cambio en la dirección de una asignación de recursos y servicios (incluyendo servicios de vivienda, asistencia sanitaria y de empleo) regulada por el mercado. Una dependencia absoluta en la asistencia familiar es probable que refuerce las desigualdades intradomésticas en la asignación de responsabilidades y ponga en peligro la igualdad de oportunidades para las mujeres trabajadoras. La auto-dependencia familiar se añade a las ya existentes disparidades interregionales y desigualdades socioeconómicas entre quienes tienen activos para invertir en sus hijos y quienes carecen de ellos (White y Goodman, 1998; Mahotra y Kabeer, 2002).

Aunque en China los valores familiares están muy arraigados (Whyte, 2003), la exaltación del *familismo* confuciano, como una panacea capaz de resolver el dilema de la seguridad social, desdeña a menudo los cambios fundamentales habidos en los modelos de crianza de los hijos, en la movilidad y en las pautas de trabajo y consumo, por no mencionar la transición democrática en China. Este enfoque ha sido criticado por presentar la cultura y la sociedad chinas de una forma esencialista, al objeto de enmascarar las implicaciones políticas subyacentes (Greenhalgh, 1994; White y Goodman, 1998; Whyte, 2003). No cabe esperar que la familia urbana, cada vez más reducida, sea autosuficiente en el contexto del rápido cambio socioeconómico y demográfico que está experimentando China. Es necesario evitar una perspectiva dicotómica “Estado/familia” y reconocer que, si bien de momento la familia china ha desempeñado un papel solvente en la provisión de cuidados, ello tiene que combinarse con un sistema de bienestar de escala nacional (Mahotra y Kabeer, 2002).

Un paisaje urbano cambiante

El *Danwei* (unidad laboral) y el sistema del *Hukou* (padrón doméstico) fueron dos de las principales características de la gobernabilidad en la China posterior a 1949. Al igual que en la conceptualización de la gobernabilidad de Foucault, ambas instituciones

participan de una forma activa y omnipresente en la producción de la identidad y de la autopercepción del ciudadano. Dado que diferentes *Danwei* pueden representar mundos diferentes, el padrón doméstico, junto con otros elementos como la clase o el género, son importantes para el estatus de una persona, para la percepción que tiene de sí misma y para las oportunidades que se le presentan (Bray, 2005).

Antes de la reforma, y hasta cierto punto todavía hoy, el *Danwei* representaba la célula básica de la sociedad urbana. Yendo mucho más allá del ámbito profesional, asignaba viviendas, proporcionaba servicios sanitarios, educación y recursos básicos, por ejemplo, cupones de racionamiento. Oficialmente, el *Danwei* urbano posterior a 1949 tenía tres objetivos principales: pleno empleo, seguridad social y producción industrial. Aunque diversos estudios contemplan la posibilidad de un origen del *Danwei* anterior al 1949, la burocracia socialista aplicada satisfactoriamente está en el centro mismo de “una forma característica de gobernabilidad socialista”, determinando, entre otras cosas, el trazado de la ciudad china y siguiendo a los residentes urbanos durante toda su vida (Solinger, 1995; Bray, 2005).

El sistema *Hukou* registra la residencia de todas las personas chinas, que heredan este estatus de sus madres. En una economía que no era de mercado, la vida familiar contribuía a la división rural/urbana, impidiendo la movilidad del campo a la ciudad. El sistema es intrínsecamente jerárquico y no facilita la transferencia, en particular el traslado del campo a la ciudad. En la China anterior a la reforma, la transferencia era posible, principalmente, mediante el acceso a los estudios universitarios. Esta oportunidad estaba fuera del alcance de la mayor parte de la población rural, claramente en desventaja en el campo educativo, altamente competitivo. El matrimonio no era calificación suficiente para poder trasladarse del campo a la ciudad, por lo que muchas parejas casadas tenían que vivir separadas. El sistema *Danwei*, por otro lado, disuadía a los potenciales emigrantes a desafiar las reglas del sistema de padrón doméstico, pues la mayor parte de los trabajos urbanos se asignaban localmente y, por consiguiente, no estaban disponibles a los titulares de un *Hukou* en las zonas rurales (Perry y Selden, 2000).

A finales de la década de los setenta, la emergencia de nuevas oportunidades en los sectores privados y en los sectores con financiación exterior, junto con la descolectivización y la introducción del Sistema de Responsabilidad Doméstica en las zonas rurales, crearon incentivos para abandonar el pueblo y dirigirse a la ciudad. La nueva filosofía de los dirigentes chinos, según la cual “hacerse rico es honorable”, contribuyó a este fenómeno, y el regreso del antiguo “joven revolucionario” de aspecto rústico, a menudo con sus familias “rurales”, introdujo una presión adicional en las ciudades. La migración del campo a la ciudad creció a un ritmo constante hasta mediados de la década de los noventa (una tasa de crecimiento anual del 25% en el período 1989-1993), a pesar de la ralentización del crecimiento económico, y llegó a unas cifras estimadas de entre 80 y 100 millones de personas (Ibídem). Al mismo tiempo, la urbanización creció fuertemente desde la reforma: el porcentaje de la población urbana ascendió desde un 17% en 1970 hasta un 29% en 1993 (McCarthy y Zheng 1996:15).

A pesar de las promesas de suavizar el sistema *Hukou*, el Gobierno mantuvo un enfoque reactivo ante esta cuestión. El establecimiento del sistema *dingti*² trató de cubrir las necesidades de los “jóvenes retornados” y de sus familias. En 1984, el Gobierno experimentó la liberalización, a nivel de pueblos pequeños (*zhen*), con aquellos casos los cuales fueran capaces de generar su propio empleo y alojamiento, con el eslogan de “dejad la tierra, no el campo” (*litu buli xiang*). Las nuevas disposiciones estuvieron en vigor hasta finales de los ochenta y sirvieron principalmente para regularizar las condiciones de los emigrantes ya presentes. La relajación de las disposiciones relativas a la residencia urbana temporal y los matrimonios de “*Hukou* mixtos” de la década de los ochenta restablecieron el papel paternalista del Estado, permitiéndole establecer alianzas ocasionales con grupos particulares, y contribuyeron a la creciente *cosificación* o mercantilización del *Hukou* creando ambigüedades en la regulación (Perry y Selden, 2000).

Determinadas modificaciones en el sistema de inscripción del padrón doméstico fueron formalmente introducidas de forma gradual desde finales de los noventa, en particular para aquellos que ya residían en las zonas rurales; en 2001-2002, las provincias más ricas, como Fujian, Guangdong, Jiangsu y Zhejiang hicieron algunos intentos de abolir la distinción entre el *Hukou* agrícola y el no agrícola. A pesar de estos intentos, sin embargo, el sistema en su conjunto se mantiene en vigor e incluso se ha vuelto más rígido, según *Social Sciences in China* (Zhang y Wu, 2005). Si bien no evita que los habitantes del campo se trasladen a las ciudades, el sistema del *Hukou* impide a la mayoría de los que emigran del campo a la ciudad el acceso a la plena ciudadanía. Aunque, como hemos dicho, la residencia urbana es accesible por medio de los canales educativos, o en algunas ciudades mediante la compra de una vivienda, la gran mayoría de la “población flotante” no tiene derecho a solicitar el *Hukou* urbano.

Emigrantes rurales, residentes y competencia

Al no poder confiar en el Estado debido a su dudoso estatus legal, la mayoría de trabajadores itinerantes capitalizan sus conexiones personales, establecen vínculos con aquellos que vienen de su misma zona (*tongxiang*), y mantienen los que ya tenían con su pueblo de origen. Los emigrantes ya instalados abren el camino a sus conciudadanos del mismo pueblo, y los introducen en las oportunidades laborales. Las nuevas “aldeas itinerantes” personifican éste estatus ambiguo. El ejemplo más famoso seguramente haya sido el de Zhejiang, en las afueras de Beijing, un activo centro comercial fundado por los emigrantes procedentes de Wenzhou. Los habitantes de Zhejiang fueron primero dispersados y, desde mediados de los ochenta, repetidamente obligados a marcharse mediante diferentes campañas de “limpieza”, aunque, después de cada una de estas campañas, volvían de nuevo (Perry y Selden, 2000).

La ambigua gestión gubernamental del tema de la migración interior pone de manifiesto hasta qué punto la migración en China constituye un tema de orden público. En las representaciones oficiales, los emigrantes son descritos como presencias “no comprobadas” o “descontroladas”, a menudo deshumanizadas y que se asocian con la idea de un “flujo invisible” (*mangliu*). Lejos de serlo, los trabajadores provenientes de la emigración rural constituyen un grupo palpable y complejo, cuyos flujos migratorios internos han cambiado en los últimos veinte años, con un reciente incremento de la migración femenina. Las ratios de género difieren perceptiblemente según los sectores: las industrias procesadoras de productos para la exportación y el sector servicios emplean mayoritariamente a mujeres, y las empresas de la construcción contratan a varones. Entre los grupos principales hay trabajadores de la construcción, trabajadores industriales, del sector servicios y autónomos, todos ellos con un estatus y unas aspiraciones diferentes.

Las condiciones de empleo de los trabajadores itinerantes varían enormemente de acuerdo con el estatus de su *Danwei*, entre otros factores. Esta institución mantuvo una relación dinámica con la migración interior, incorporando a los emigrantes en función de sus necesidades económicas. Actualmente, la auténtica motivación del *Danwei* no es el pleno empleo o la producción, sino el provecho económico. Los trabajadores itinerantes rurales son valiosísimos en las ciudades, donde las trayectorias profesionales de la juventud urbana ya no las decide el Estado, sino el mercado. La mayoría de trabajadores itinerantes no están registrados y están empleados en el sector informal, un sector en rápida expansión pero muy mal regulado; no disfrutan de seguridad social e incluso cuando trabajan en el sector estatal, mucho mejor regulado, apenas pueden disfrutar plenamente de sus derechos laborales (Solinger, 1995).

Su condición se ve aún más debilitada por el crecimiento del desempleo, en particular después de la reestructuración de las Empresas de Propiedad Estatal (EPE). La importancia del desempleo es difícil de calcular, ya que a menudo se disimula manteniendo a los trabajadores no remunerados en los libros de contabilidad de las empresas (*xiagang*): el año 2001, el desempleo urbano alcanzó la cifra de 60 millones de personas, y ese mismo año, según *Social Sciences in China*, 30 millones de trabajadores perdieron su empleo; esto puede corresponder a una proporción de entre un 14% y un 29% de la población activa urbana³ (Solinger, 2003).

La encuesta “Trabajo Urbano en China”, llevada a cabo por la Academia China de Ciencias Sociales (ACCS) entre 1996 y 2001, constató que, en todas las ciudades donde se había realizado el sondeo (Fuzhou, Shanghai, Shengyang, Wuhan y Xi’an), el desempleo alcanzaba números de dos cifras. Las oportunidades de reempleo variaban de una ciudad a otra, siendo menores en Wuhan, Shengyang y Xi’an, donde solamente un 29%-30% de quienes se habían quedado sin trabajo fueron nuevamente empleados antes de haber transcurrido un año. En estas tres ciudades, cuando las prestaciones por desempleo y los atrasos estaban disponibles, estos eran demasiado modestos para tener un impacto positi-

vo en los medios de vida de los trabajadores. En las cinco ciudades estudiadas, el nivel de instrucción, la edad y el género eran variables importantes para el empleo y el reempleo. Es previsible que la intensificación de la competencia erosione todavía más los derechos y las oportunidades laborales, principalmente en el caso de los grupos más vulnerables, como los ancianos y las mujeres trabajadoras (Giles, Park y Cai, 2006).

PROTESTAS, “CULTURA” Y POLÍTICA

“En todo momento, creemos que la ‘verdad’ sobre China está en nuestra cabeza, un recaudo notoriamente inseguro para tan valiosa mercancía”.

Ong, 1996

El desplazamiento de las titularidades a la seguridad social proporcionada por el Estado ha provocado un sentimiento generalizado de inseguridad entre la antigua “aristocracia trabajadora”. La dislocación sufrida por el sector nuclear de la clase obrera estatal no se limita a los privilegios materiales, sino que afecta también a las percepciones, profundamente arraigadas, de dichas titularidades. Una encuesta llevada a cabo por la ACCS en 2001 en 72 ciudades, condados y barrios constató que el 23,8% de los encuestados creía que su nivel de vida había empeorado desde 1995, y un 11,2% afirmaba que era mucho peor (Perry y Selden, 2000; Solinger, 2003).

Malestar y resistencia

La reforma creó nuevos espacios políticos e institucionales para la articulación de las quejas, que principalmente surgen en torno a cuestiones laborales, fiscales o de la propiedad de la tierra, y generalmente se dirigen contra funcionarios, jefes y capitalistas. En 1987, el Consejo de Estado restableció el sistema de arbitraje de conflictos laborales que había sido abolido en 1955. En 1997 se habían organizado unas 270.000 comisiones de mediación de conflictos laborales a nivel empresarial, y el número de empleados involucrados en cada disputa colectiva aumentó desde un 16,2% en 1992 a un 37,1% en 1998. La mayoría de los conflictos son de naturaleza económica, incluyendo el pago de salarios, atrasos y prestaciones que en otro tiempo representaban los privilegios de la clase trabajadora urbana (Perry y Selden, 2000).

En 1980-1981, los trabajadores de Shanghai se vieron involucrados en una oleada de huelgas y reivindicaciones a favor de los sindicatos libres, siguiendo el modelo del

sindicato polaco Solidaridad. Esta tendencia se mantuvo durante toda la década de los ochenta, mientras que la reforma de las leyes sobre los contratos de trabajo, las declaraciones de quiebra y la reoptimización ponían en peligro el estatus de los trabajadores. En tanto la inflación subía entre un 18,5% y un 25,5% en 1988-1989, aquel año hubo más de cien huelgas. En 1989, el Movimiento del 4 de Junio en Tiananmen recibió el apoyo de los huelguistas de todo el país que, en muchos casos, hicieron frente a la reacción gubernamental después de las enérgicas campañas organizadas contra los manifestantes (Perry y Selden, 2000; Perry, 2002).

A medida que un número cada vez mayor de fábricas se veían abocadas al cierre durante la década de los noventa, las huelgas dejaron paso a las protestas públicas, en las que participaban no solamente los trabajadores de más edad, sino también los más jóvenes de las empresas privadas y de financiación exterior, particularmente en las Zonas Económicas Especiales, donde la inflación llegó al 20%-27%. El Centro de Hong Kong por la Democracia y los Derechos Humanos registró 60.000 protestas en 1998. Según publicó *Far Eastern Economic Review*, el número de protestas llegó a 100.000 en 1999, y en 2002 la represión de las manifestaciones en la zona nororiental de China obtuvo una amplia cobertura en la prensa occidental (Solinger, 2003).

Además de trabajadores de la industria pesada del sector estatal, entre los manifestantes había trabajadores despedidos, *xiagang*⁴ y jubilados. Además de protestar contra la erosión de los derechos laborales y el cierre de fábricas, las manifestaciones también atacaban la corrupción, el abuso de poder de los directivos y la utilización de activos estatales identificados con la privatización. La privatización proporciona a los manifestantes el marco para una movilización de la conciencia de clase, confiriendo un significado enteramente nuevo a los eslóganes contra la “nueva burguesía” y el “capitalismo”, así como a favor de la “clase obrera” y el “socialismo” (Perry y Selden, 2000; Feng, 2006).

A partir de los noventa, la política de “atrapar lo grande y renunciar a lo pequeño” (*zhuada fangxiao*) promovió la privatización de las pequeñas y medianas EPE, en ausencia de una legislación nacional sobre los procesos de privatización. En muchos casos, la “privatización” sancionó el paso de activos estatales a manos privadas mediante procesos poco claros que implicaban connivencias entre directivos, compradores privados y funcionarios locales. Es bastante habitual que los trabajadores se organicen en defensa de lo que consideran como “los legítimos derechos y activos del pueblo”, apelando a las autoridades y adoptando medidas “transgresoras” solamente después del fracaso de los procesos legales para la resolución de los conflictos (Feng, 2006). Hasta la fecha, la Unión de Sindicatos Libres de China (USLC) ha desempeñado un papel conciliador, en particular formando parte de los comités de empresa en las disputas. Aparte del hecho de que los despidos representan una pérdida considerable de afiliados a los sindicatos, cada vez es mayor el número de trabajadores que pierden la confianza en la capacidad de la USLC de influir en las decisiones oficiales. El período posterior a 1989 fue testigo del

surgimiento de sindicatos clandestinos, que tratan de obtener cobertura en los medios de comunicación occidentales actuando estratégicamente en correspondencia con importantes acontecimientos nacionales o internacionales (Hay Gries y Rosen, 2004; Howell, 2003; Perry y Selden, 2000).

Además del hecho de que la mayoría de las protestas son “locales”, la diversidad de procedencia y de intereses de los manifestantes constituye su principal debilidad. Los movimientos sociales de los trabajadores están divididos por su origen geográfico, su estatus residencial (*Hukou* rural o urbano), sector laboral, edad y género, tipo de contrato (permanente o temporal), etc. La presencia de trabajadores itinerantes, por ejemplo, ha sido mencionada como un factor que podría demorar o debilitar las protestas. El papel que desempeña la identidad local es particularmente ambiguo, pues si, por un lado, facilita la organización de determinados grupos, por el otro, puede impedir las alianzas y la expansión del movimiento (Perry y Selden, 2000; Feng, 2006). Según *Social Sciences in China*, la creciente fragmentación social en términos de titularidades favorece la estabilidad social, incluso en un contexto en el que se produce una disminución de la movilidad social (Zhang, 2006; Zhang y Wu, 2005).

El Gobierno chino ha sabido explotar muy bien estas diferencias, utilizando la política del “palo y la zanahoria”: concesiones parciales a aquellos que están dispuestos a aceptar un compromiso, y encarcelamiento inmediato de los líderes de las protestas. Hasta ahora, los dirigentes chinos han tratado la mayoría de sublevaciones como “válvulas de escape”, reprimiéndolas energícamente sólo cuando se extendían demasiado y las reivindicaciones se politizaban. La intervención del Gobierno ha sido rápida contra las alianzas transversales e interclasistas, así como contra el establecimiento de organizaciones alternativas de trabajadores (Perry y Selden, 2000; Perry, 2002; Feng, 2006).

Un problema permanente: el debate sobre la legitimidad política del PCC

Se ha dicho que, después de treinta años de políticas de “puertas abiertas”, la legitimidad política del Gobierno chino ya no se basa en el socialismo, sino en el crecimiento y el desarrollo económico (Croll, 1998; White y Goodman, 1998). Dado que las clases trabajadoras urbanas han dejado de desempeñar el papel de “socios de coalición” del Estado en la construcción del socialismo, es lícito preguntarse si el Partido Comunista Chino (PCC) no necesita encontrar una base social distinta para poder mantener su liderazgo (Croll, 1999; Solinger, 2003, 2004).

Según la teoría de los “tres pilares” (*sange daibiao*), que Jiang Zemin presentó en el año 2000, el PCC tiene que tener en cuenta los “intereses fundamentales” de “las fuerzas productivas avanzadas”, la “cultura avanzada” y “el pueblo”. La teoría no profundiza en la composición de esta tercera y muy amplia categoría, ni tampoco especifica si en ella

se incluyen los que todavía están “en la pobreza”. La perceptible segmentación y polarización social de China ha llevado a los investigadores chinos a cuestionar la validez de la teoría de los “tres pilares”. Según un estudio realizado en 1999, el segundo “pilar” corresponde a tan sólo el 18,3% de la muestra; en 2005, Zhang y Wu calcularon que el “estrato medio” chino era un grupo heterogéneo y fragmentado que comprendía menos del 15% del total de la población activa (Solinger, 2003; Zhang y Wu, 2005).

Otros investigadores sostienen que la resistencia a los efectos de la reforma económica no representa necesariamente una amenaza para el régimen. Según Vivianne Shue, la legitimidad del PCC no se basa en su capacidad técnica para mantener el crecimiento económico, sino en su capacidad política para mantener la estabilidad que posibilita el crecimiento económico. La legitimidad del partido derivaría, en última instancia, de su monopolio sobre lo que es “bueno y verdadero” (Hays Gries y Rosen, 2004). Minxin Pei (2006), por su parte, subraya que la legitimidad del Gobierno chino no deriva de la soberanía popular, sino de “la habilidad del Gobierno para servir a los intereses del pueblo”. La ampliación de derechos a los individuos tiene por objetivo capacitar a los individuos para servir mejor al Estado, cuya fuerza para imponer la ley y el orden constituye el mayor de los bienes comunes. Los intereses colectivos tienen prioridad sobre los derechos individuales, y los individuos disfrutaban de ciertos derechos solamente en virtud de su deber de servir al Estado y a la colectividad en su conjunto. La productividad de un ciudadano, su actitud “civilizada”, su poder adquisitivo son, en última instancia, apreciados y valorados como un servicio a la nación (Perry y Selden, 2000).

Shue sugiere que la virtud del Estado tiene su origen en los conceptos de “gloria, benevolencia y verdad”, que pueden vincularse con el orgullo nacionalista chino, el papel paternalista del Estado y su responsabilidad para con el pueblo, así como en las doctrinas “científicas” que están en la base del más reciente proyecto de modernización de China: la Reforma de las Puertas Abiertas. Si el descontento social llega algún día a desempeñar un papel en la desestabilización del *statu quo*, es probable que en ese mismo momento el PCC se vea amenazado por movimientos organizados que se le enfrentarán desde una posición moral fundada en estos mismos conceptos. El Falun Gong ejemplifica el caso de un movimiento que, con su propuesta de una versión diferente de “la verdad, la benevolencia y la gloria”, se dirige a los miembros desafectos de la burocracia del partido y del Estado, y establece de este modo una continuidad con el papel político de la tradición filosófica y “religiosa” china (Hays Gries y Rosen, 2004).

Estas sugerencias no deben interpretarse como una teoría de la cultura divorciada de la práctica social. Esta lectura implicaría un concepto de “cultura” como un sistema ahistórico de significados colectivos que justifican intrínsecamente la perpetuación del *statu quo*. Un concepto esencialista de cultura, o de China como una “cultura”, situaría cómodamente a China en el sendero evolutivo que lleva a la modernización y en el que la cultura emerge como “una categoría residual que posibilita que las especificidades del

‘caso chino’ sean categorizadas sin problemas como fracasos” (Farquhar y Hevia, 1993). En este caso, el fracaso de la protesta organizada y su incapacidad de derrocar al partido gobernante y abrir la vía a una democracia “moderna” de estilo occidental.

Una lectura distinta de los puntos de vista más arriba mencionados destaca las complejidades de la construcción del consenso social en China. La legitimidad del Estado se edifica diariamente en el discurso oficial y en el extraoficial, ambos también basados en los conceptos esencialistas de una cultura china inmemorial y étnicamente superior que no se opone a, sino que es un elemento esencial de los proyectos de modernización pasados y presentes de China. Entre los múltiples actores que producen conocimiento y organizan las subjetividades en la China actual, el Estado desempeña un rol importante mediante su relato de una “comunidad imaginada nacional” que “conecta inextricablemente la modernización y las aspiraciones modernistas al reforzamiento de la madre patria” (Ong, 1996). Sin embargo, no puede darse por supuesto que la producción de conocimiento en la China actual sea un privilegio exclusivo del Estado. El papel del mercado, como puntualizan diversas voces procedentes tanto de los círculos intelectuales chinos como de los de la crítica literaria occidental (Hockx y Strauss, 2005; Wang, 2003), sigue siendo muy minimizado, y tampoco se reconoce la importancia de su compleja relación con el poder del Estado. Además, una visión estatocéntrica del conocimiento-poder en la China actual subestima el rol que tienen determinados actores internacionales en las decisiones que afectan a las vidas de los chinos corrientes. Como dice Feng (2006), aunque el movimiento de los trabajadores ha dado muestras de tener un pensamiento estratégico, por ejemplo con referencia a la retórica socialista, no es probable que sus demandas sean satisfechas debido a que “la transición hacia el mercado es irreversible”.

Accidentes, alianzas y preocupaciones

Seguramente la noción esencialista del “elemento cultural” nos ayuda más bien poco a dilucidar si el movimiento de los trabajadores representa o no una amenaza real a la estabilidad política china. Será más útil sin duda, centrarse en las complejidades del panorama social, con el objetivo de abrir nuevos ámbitos de debate absolutamente relevantes en este sentido. En particular, es difícil debatir entorno a cuestiones como la legitimidad política y el control social, sin relacionarlas con la producción del conocimiento. En China, los discursos del orden social fomentados por el Estado y el mercado responden a una mezcla ecléctica de tradición confuciana, nacionalismo chino, la atención puesta en las ciencias sociales de tipo racionalista y positivista, la actitud paternalista, las alegrías y emociones del consumismo, etc., muchos de los cuales evocan, efectivamente, el análisis de Shue. Éstas retóricas no están en conflicto entre sí, sino que todas ellas participan en el moderno proyecto chino de reforma, que se está apropiando del legado de los “valores asiáticos” implícito en los relatos capitalistas que siguen los pasos de los

“tigres asiáticos” confucianos (Ong, 1996). China ha emprendido un camino “asiático” en el que la unidad de los chinos del continente con los del exterior es clave para la edificación de una nación fuerte y capaz de relacionarse de igual a igual con los poderes del mundo occidental.

La idea de que la “cultura” puede explicar o predecir el futuro de China, también indica la necesidad de observar las prácticas sociales en el seno de su contexto histórico, sin pasar de largo de los accidentes y las contradicciones. Hasta ahora, los trabajadores y jubilados desposeídos han utilizado los espacios que tenían a su disposición para expresar su descontento: manifestaciones públicas de protesta y resistencia, que no son en absoluto fenómenos nuevos en la sociedad china (Perry y Selden, 2000). Los dirigentes han mantenido con habilidad la política del “divide y vencerás”, explotando las diferencias entre los distintos movimientos y sus tendencias localistas, ilegalizando a los sindicatos independientes e impidiendo las alianzas interclasistas. El papel de otros grupos, en particular de los intelectuales y de los disidentes políticos, será crucial en el desarrollo político y social de China. La tradición de compromiso de los intelectuales chinos los convierte en unos productores de conocimiento privilegiados que, sin embargo, quedan en una posición ambigua respecto al Estado. Los intelectuales y los estudiantes disidentes han sido criticados por sus posiciones elitistas respecto a los trabajadores, especialmente por el hecho de que, en 1989, durante las manifestaciones de protesta en Tiananmen, no supieron reconocer el respaldo que les estaban ofreciendo los trabajadores de todo el país (Masi, 2004; Perry, 2002; Perry Selden, 2000). Aunque los dirigentes del movimiento del 4 de Junio han negado más tarde tener una posición elitista, diversas versiones confirman que, en aquel momento, entre las inquietudes de los estudiantes no se incluían los problemas de los parados urbanos, sino que estaban básicamente centradas en el problema de la participación política (Wang, 2005; Wang, 2000; Perry, 2002).

En la actualidad, el paisaje intelectual chino está muy diferenciado. Entre los economistas y los intelectuales orgánicos, las políticas neoliberales ya no son consideradas como la única forma de capitalismo que puede ser beneficiosa para China, mientras que los intelectuales de la llamada “Nueva Izquierda” buscan alternativas locales al sistema político actual en el contexto de la escuela de la “nueva crítica” china (Wang, 2005; Wang, 2000). De todos modos, hasta ahora, ninguno de estos círculos ha elaborado propuestas para una alternativa viable a las políticas neoliberales que condicionan la vida de la clase obrera china. Como puntualiza Perry (2002), al recordar los hechos del 4 de junio de 1989, no hay que concebir al PCC como una “caja negra” monolítica, sino como un espacio de negociación interna. Sería interesante ver cómo se desarrollarían los acontecimientos en caso de que se produjese una manifestación de protesta políticamente importante en un lugar sensible como, por ejemplo, hubiera podido ser Beijing durante la celebración de los Juegos Olímpicos del 2008.

Este ensayo empezaba con una preocupación por la desigualdad y la estabilidad social, pero concluye con una mirada a los diferentes relatos e intentando desmitificar dicotomías como modernidad *versus* tradición, o racionalidad *versus* cultura. Es también un intento de preguntarnos de una manera reflexiva por nuestras propias incógnitas e intereses en cuanto a la estabilidad política de China. Sería muy útil enmarcar a la sociedad china en un contexto mundial más amplio, en el que Occidente dejase de ser una categoría no problemática y se convirtiese en un actor, o en uno de los diferentes actores, del paisaje global.

Además de desempeñar un papel en la adopción de una u otra política por parte de los dirigentes chinos, los actores occidentales contemplan a China desde unos puntos de vista determinados, planteándole determinadas cuestiones y suscitando una serie de inquietudes que pueden ser tan reveladoras para el propio Occidente –y su idea preconcebida de cómo China debería ser– como para China. Además de ser identificada con una “tradición” y una “cultura” eternas, China es también un país en transición al mercado, que estuvo aislado de Occidente durante casi treinta años durante el siglo XX. El discurso público en Estados Unidos y Europa a menudo ha presentado a China de manera errónea, como aliada de la Unión Soviética o un lugar remoto y sometido a la variante más extrema e inhumana del comunismo. Después de la reforma, ciertamente, la imagen de China en Occidente ha mejorado, y ahora los líderes chinos son a menudo descritos por los medios de comunicación como unos dirigentes prudentes y sinceramente comprometidos con la reforma. Si bien las tópicas imágenes de China como un lugar “atrasado, pobre y habitado por unos seres irracionales” sigue estando presente en los discursos oficiales y de los medios, la expansión de la economía de mercado podría conducir a que los observadores empiecen a considerar a los habitantes de China como “gente como nosotros”. Este sector de población sería la emergente clase enriquecida o los grupos sociales con un nivel instructivo alto, mientras que las “clases de trabajadores desposeídas” y la denominada población flotante encarnaría el papel de las masas irracionales y sin forma. De acuerdo con ésta perspectiva, estas masas podrían caer bajo el control de la tradición eterna y precisamente por ello, representan un riesgo para la estabilidad de China. Si el tópico del “chino perverso” o el maoísmo no existieran ya para asustarnos, posiblemente la idea de las “masas” podría aún representar la imagen de lo “opuesto” en el imaginario de la clase media occidental.

Notas

1. *Nota de edición:* El coeficiente Gini es un indicador estadístico que mide el grado de desigualdad existente en una sociedad concreta y la transforma en un coeficiente dentro de una escala que va de 0 (igualdad perfecta) a 1 (desigualdad perfecta). Expresado como porcentaje, recibe el nombre de Índice Gini.

2. *Nota de edició*n: El sistema del *Dingtí* consistió en ofrecer la posibilidad de que un hijo/a sustituyera a su padre/madre en el centro de trabajo, en una suerte de sistema de jubilación. Véase SAIZ, Amelia. "Mujeres y género en la sociedad china contemporánea". En: *Visions de la Xina: cultura multimedial-lenària*. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 2009. [en línea] <http://www.fti.uab.es/interasia/catalan/work/publications.html>
3. Estos datos deben considerarse como simples estimaciones, debido a que resulta muy difícil medir las dimensiones reales de la población activa urbana.
4. *Nota de edició*n: El término *xiagang* hace referencia a los trabajadores en excedencia de las grandes corporaciones de propiedad pública que, en la práctica, cuentan con pocas posibilidades de reincorporación.

Referencias bibliográficas

- APPADURAI, Arjun. "The capacity to aspire: culture and the terms of recognition". En: RAO, Vijayendra y WALTON, Michael (eds.) *Culture and public action*. Stanford University Press, 2004.
- BECKER, G. A *Treatise on the Family*. Harvard University Press, 1993. Cap. 2, 8.
- BRAY, David. *Social space and governance in urban China: the danwei system from origins to reform*. Stanford University Press, 2005.
- CHAMBERS, Robert. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* Institute of Development Studies, 1995. Discussion Paper 347.
- CROLL, Elisabeth. "Social Security Reform: Trends and Tensions". *China Quarterly*, 1999.
- *Endangered Daughters: discrimination and development in Asia*. London: Routledge, 2000.
- DRÈZE, Jean y SEN, Amartya. *Hunger and Public Action*. Vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1989.
- DUCKETT, Jane. "State, collectivism and worker privilege: a study of urban health insurance reform". *China Quarterly*. No. 177 (2004).
- DUDWICK, Nora; GOMART, Elizabeth; MARC, Alexandre y KUEHNAST, Kathleen (eds.) *When things fall apart: qualitative studies of poverty in the former Soviet Union*. Washington, DC: World Bank, 2003.
- DWYER, D. y BRUCE, J. (eds.) *A Home Divided*. Stanford University Press, 1988.
- ELSON, Diane. "Appraising Recent Developments in the World Market for Nimble Fingers: Accumulation, Regulation, Organization". En: CHACCHI y PITTIN (eds.). *Confronting State, Capital and Patriarchy*. London: Macmillan, 1995.
- FAIRBANK, John K. *China perceived: images and policies in Chinese-American relations*. London: Deutsch, 1976.
- FARQUHAR, Judith B. y HEVIA, James. "The American historiography of China". *Positions*. 1:2 (1993).
- FENG Chen. "Privatization and its discontents". *The China Quarterly*. No. 185 (2006).
- FOUCAULT, Michel. (1979). *Discipline and punish: the birth of the prison*. Penguin, 1979. [Trad. cast: *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Ed. Siglo XXI].

- GILES, PARK y CAI. “How has economic restructuring affected China’s workers?”. *The China Quarterly*. No. 185 (2006).
- GOODMAN, David S. G. (ed.). *China’s Provinces in Reform – Class, Community and Political Culture*. Routledge, 1997.
- GREENHALGH, Susan. “De-Orientalizing the Chinese Family Firm”. *American Ethnologist*. Vol. 21, No. 4 (1994).
- GORE, Charles. “Entitlement relations and “unruly” social practices: a comment of the work of Amartya Sen”. *The Journal of Development Studies*. 29, 3 (1993).
- GUSTAFFSON, Bjorn y WEI, ZHONG. “How and why has poverty in China changed? A study based on microdata for 1988 and 1995”. *The China Quarterly*. No. 164 (2000).
- HAYS GRIES, Peter y ROSEN, Stanley (eds.). *State and Society in 21st Century China – Crisis, Contention and Legitimation*. Routledge Curzon, 2004.
- HOCKX, Michael y STRAUSS, Julia. “Introduction”. *The China Quarterly*, No. 183 (2005). P. 523-531.
- HOWELL, Jude. “State Enterprise Reform and Gender: One Step Backwards for Women?”. En: BENEWICK, R., BLECHER, M. y COOK, S. (eds.) *Asian Politics in Development: Essays in Honour of Gordon White*. Frank Cass Publishers, 2003.
- HULME, David y ANDERSON, Andrew. “Conceptualising Chronic Poverty”. *World Development*. Vol. 31, No. 3 (2003).
- KABEER, Naila. *Reversed Realities*. New York: Verso, 1994.
- KANDIYOTI, Deniz. “Bargaining with Patriarchy”. *Gender and Society*. Vol. 2, No. 3 (1988). P. 274-290. – “Gender, Power and Contestation – Rethinking Bargaining with Patriarchy”. En: JACKSON, C. y PEARSON, R. (eds.) *Feminist Visions of Development – Gender Analysis and Policy*. Routledge, 1998.
- KHAN AZIZUR, R. y RISKIN, Carl. “China’s household income and its distribution”. *The China Quarterly*. No 182 (2005).
- MASI, Edoarda. “Entrevista a Edoarda Masi”. *Kamen’ Rivista di poesia e filosofia*. Anno XIII, No. 23 (2004).
- MAHOTRA, Rahul y KABEER, Naila. “Demographic Transition, Intergenerational Contracts and Old-age Security: an Emergency Challenge for Social Policy in Developing Countries”. *IDS Working Paper* 157 (2002).
- MCCARTHY, F. DESMOND y ZHANG Kanbing. “Population Aging and Pension Systems: Reform Options for China”. *Policy Research Working Paper*. No. 1607 (1996). The World Bank, Development Economics Department.
- MCGIFFERT, Carola (ed.). *China in the American Political Imagination*. Washington: The CSIS Press, 2003.
- MINXIN Pei. *China’s Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy*. Harvard University Press, 2006.
- MILWERTZ, Cecilia. *Accepting Population Control, Urban Chinese Women and the One-Child Family Policy*. Richmond: Curzon, 1996.
- MOORE, Henrietta. “Household and Gender Relations: the Modelling of the Economy”. En: ORTIZ y LEES (eds.) *Understanding Economic Processes*. Society for Economic Anthropology: University Press of America, 1992. Cap. 7.

- MOSER, Caroline O. N. *Gender Planning and Development*. Routledge, 1993. Cap. 1, 2, 3.
- NUSSBAUM, Martha C. "Capabilities as fundamental entitlements – Sen and social justice". En: AGARWAL, Bina, HUMPHRIES, Jane y ROBEYNS, Ingrid (eds.). *Capabilities, freedom and equality – Amartya Sen's work from a gender perspective*. Oxford University Press, 2004.
- ONG, Aihwa. "Anthropology, China and modernities: the geopolitics of cultural knowledge". En: MOORE, H. (ed.). *The future of anthropological knowledge*. Routledge, 1996.
- PERRY, Elizabeth J. *Challenging the mandate of Heaven, social protest and state power in China*. East Gate, M.E. Sharpe, 2002.
- PERRY, Elizabeth J. y SELDEN, Mark (eds.). *Chinese Society – Change, Conflict and Resistance*, 2nd Edition. Routledge Curzon, 2000.
- RAZAVI, Shahra. "Export Oriented Employment, Poverty and Gender: Contested Accounts". *Development and Change*. Vol. 30 (1999).
- SEN, Amartya. "Rational fools: a critique of the behavioural foundations of economic theory". *Choice*, – "Gender and Cooperative Conflicts". En: TINKER, I. (ed.) *Persistent Inequalities*. Oxford University Press, 1991.
- *Development as Freedom*. Oxford University Press, 1999. [trad. cast: *Desarrollo y libertad*. Ed. Planeta].
- SOLINGER, Dorothy J. "The Chinese work unit and transient labor in the transition from socialism". *Modern China*. Vol. 21, Issue 2 (1995).
- "Why we cannot count the "Unemployed"". *China Quarterly*. No. 167 (2001).
- "Labour Market Reform and the Plight of the Laid-off Proletariat". *China Quarterly*. No. 170 (2002).
- "State and Society in Urban China in the wake of the 16th Party Congress". *China Quarterly*. No.176 (2003).
- TANG Xiaobing. *Chinese Modern, the heroic and the quotidian*. Duke University Press, 2000.
- WANG, Chaohua (ed.) *One China, many paths*. Verso, 2005.
- WANG Hui. "A New Left in China". *New Left Review*. Second Series, No. 6 (noviembre/diciembre 2000).
- WHITE, Gordon y GOODMAN, Roger, et al. "Welfare Orientalism and the search for a East Asian Welfare Model". En: WHITE, Gordon; GOODMAN, Roger y KWON Huk-JU, 1998. Routledge, 1998.
- WHYTE, Martin K. (ed.) *China's Revolutions and Intergenerational Relations*. Center for Chinese Studies, The University of Michigan, Ann Arbor, 2003.
- YANAGISAKO, S. "Family and the household: the analysis of domestic groups". *Annual Review of Anthropology*. No. 8 (1979).
- ZHANG, Jian. "In China Social Welfare and Economic Reform Must Proceed in Tandem" (2000): <http://www.arc.murdoch.edu.au/asiaview/jul00/zhang.html>
- ZHANG Liqun y WU Zhimen. "Comprehensive conclusions on the realization of a well off society in China (1990-2003): on the construction of a harmonious society". *Social Sciences in China* (invierno 2005).
- ZHANG Yi. "A study of stratum consciousness in urban China". *Social Sciences in China* (primavera 2006).

COLECCIÓN

INTERROGAR LA ACTUALIDAD

¿QUÉ PIENSA RUSIA?

Iván Krastev
Mark Leonard
Andrew Wilson (eds.)

Iván Krastev es presidente del Centro de Estrategias Liberales de Sofía. Es miembro de la junta directiva del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) y del Instituto Internacional de Estudios de Seguridad (IISS) de Londres. También es editor jefe de Foreign Policy en Bulgaria y editor asociado de Europe's World.

Mark Leonard es director ejecutivo del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). Anteriormente fue director de política exterior del Centro para la Reforma Europea (CER) de Londres y director del Centro de Política Exterior, un think tank que fundó bajo el patronato del primer ministro Tony Blair. Mark ha sido investigador del German Marshall Fund de Estados Unidos y fue estudiante visitante en la Academia China de Ciencias Sociales. Es un escritor y comentarista prolífico. Su primer libro, Por qué Europa dirigirá el siglo veintiuno, ha sido traducido a 18 idiomas; en 2008 publicó ¿Qué piensa China?

Andrew Wilson es experto en política del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). Previamente fue profesor de Estudios Ucrainianos en la Escuela Eslava y de Estudios de Europa del Este (SSEES) de la University College of London. También es investigador honorario del Real Instituto de Estudios Internacionales. Ha publicado extensamente sobre la política y la cultura de la vecindad europea, así como sobre las políticas de democratización en los estados postsoviéticos.

Rusia no quiere ser como la Unión Europea ni confía en ella. Esta es la principal conclusión que se desprende de este libro, elaborado en el marco de un debate público en Rusia que está más vivo que nunca. La política de la Unión Europea hacia Rusia no puede tener éxito si continúa basándose en supuestos de partida erróneos y análisis defectuosos. Sólo si los políticos europeos recuperan la curiosidad y el interés por dicho debate se podrá desarrollar una política efectiva hacia Moscú. Esta recopilación de ensayos pretende aportar algo de chispa que prenda de nuevo la mecha de esta curiosidad perdida.

Los autores de esta obra son influyentes intelectuales rusos, que desgranar los entresijos de la política rusa hacia Europa. Entre otros, encontramos textos de Fyódor Lukyánov, Valéri Fadéev, Vyacheslav Glazychev, Gleb Pavlónsky o Leónid Polyakov, cuya influencia se deja sentir en el Kremlin, pues muchos de ellos han asesorado a Vladímir Putin y Dimitri Medvédev

¿QUÉ PIENSA RUSIA?

Iván Krastev
Mark Leonard
Andrew Wilson (eds.)



CIDOB 

EDITAN

CIDOB
Elisabets, 12
E-08001 Barcelona
www.cidob.org

ECFR
Goya, 5-7 Pasaje 2
E-28001 Madrid
www.ecfr.eu

DISTRIBUYE

Edicions Bellaterra, S.L.
Navas de Tolosa, 289 bis,
08026 Barcelona
www.ed-bellaterra.com